

XXXIII Reunião Ordinária da REDPO

ANEXO X

19 de outubro de 2021

**"Propuesta de Declaración sobre Inmigración, Pobreza y Derechos de las Personas
Involucradas en Tráfico de Drogas"**

**Reunión Especializada de Defensores Públicos Oficiales del MERCOSUR
(REDPO)**

Considerando:

El plan de Acción Hemisférico sobre Drogas 2021 a 2025, presentado en el 68° periodo ordinario de sesiones, entre el 9 y el 11 de diciembre de 2020, en la ciudad de Bogotá, por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (OEA/CICAD)¹;

El informe Mundial sobre Drogas, publicado en 2020, por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), incluso abordando el impacto de la pandemia COVID-19 en el mercado de narcóticos²;

El Informe sobre Pobreza y Derechos Humanos en las Américas, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 7 de septiembre de 2017³;

Las “100 Reglas de Brasilia”, aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana de 2008, sobre el acceso a la justicia para las personas en condiciones de vulnerabilidad, incluidas las que se encuentran en situación de pobreza, migración o otras formas de desplazamiento forzado y también las personas privadas de libertad;

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, denominadas “Reglas Mandela”, aprobadas por la Asamblea General de la ONU el 17 de diciembre de 2015;

Las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y las medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes, conocidas como las “Reglas de Bangkok”;

¹ http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?IE=CO005F

² <https://wdr.unodc.org/wdr2020/index.html>

³ <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PobrezaDDHH2017.pdf>

Que, en grande medida, existe un porcentaje de personas en contexto de movilidad humana en nuestros países, generalmente pobres, que se encuentran presos por tráfico y posesión de drogas, en situación de vulnerabilidad;

Que, las mujeres, particularmente las mujeres latinoamericanas, se ven atravesadas por diversas condiciones de vulnerabilidad, sea por su situación de pobreza, desigualdad de oportunidades, falta de autonomía financiera y social, violencia de género, migración, entre otros factores, que guardan íntima relación con el crecimiento del número de mujeres privadas de la libertad y/o procesadas en relación con el tráfico de drogas;

Que los derechos y garantías de las personas encarceladas son fundamentales para mitigar los efectos nocivos de la prisión y el regreso a la vida social, por lo que requieren de una particular protección, máxime considerando las mayores dificultades que pueden presentarse en el caso de personas en contexto de movilidad humana;

Que, resulta vital para resolver los factores de desigualdad que afectan particularmente a las personas en contexto de movilidad humana en los procesos en que son parte, que se garantice el acceso a una defensa pública gratuita, con intermediación de intérpretes idóneos, y la información adecuada respecto de la asistencia consular y su requerimiento. De igual modo, las leyes que regulan los delitos relacionados con el tráfico de drogas, deben ser acordes al principio de legalidad;

Que el derecho a las visitas (Regla 58 de las Reglas Mínimas del Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas) es un derecho primordial para el sostén y fortalecimiento de los lazos familiares, siendo esencial la implementación de medidas que lo aseguren - por ejemplo, el Proyecto Visita Virtual Internacional-;

Que, atendiendo al carácter transfronterizo de la problemática y las consecuencias particulares que se generan en los proyectos de vida de las personas en contexto de movilidad humana, deberán potenciarse los mecanismos de colaboración entre las defensorías públicas a fin de garantizar el acceso a los derechos y servicios públicos, como también, asegurar los procedimientos voluntarios de retorno seguro;

Que se debe respetar el principio general de no criminalización de la migración, destacando la Opinión Consultiva núm. 18/03 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual es obligación de los estados “determinar sus políticas migratorias

únicamente a la luz de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos” y “principios de igualdad y no – discriminación”.

Que, atendiendo a las realidades diversas de las personas en contexto de movilidad humana, el hecho de existir un proceso penal en su contra no debería ser óbice para el acceso a medidas de protección alternativas y el análisis independiente e imparcial de eventuales solicitudes de refugio, medidas de protección en tanto víctima de trata, entre otras;

Que la Recomendación no. 203 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, punto 06, reconoce la posibilidad de configurar como trabajo forzoso la participación forzosa o involucración obligatoria en actividades ilícitas, incluso en el contexto de la trata de personas (ítem 4.g), recomendando a los Estados Miembros adoptar las medidas necesarias para garantizar que las autoridades competentes tengan la prerrogativa de no procesar ni imponer sanciones a las víctimas de estas condiciones;

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe “*Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México*”⁴, en 2013, reconoció como situaciones de trata de personas situaciones en las que el migrante se ve obligado a trabajar de diferentes formas para los grupos delictivos organizados, incluidas las actividades delictivas;

Las Defensorías Públicas, organizadas y de acuerdo al Estatuto de la REDPO, en el ámbito de nuestras facultades constitucionales y legales, DECLARAMOS que es necesario:

- I. Difundir y compartir buenas prácticas en materia de políticas y estrategias jurídicas de defensa vinculadas a delitos de drogas en el contexto de la realidad de nuestra Región, especialmente en lo que se refiere al desarrollo normativo en la legislación de cada país y prácticas en la administración de justicia que eviten la criminalización de la pobreza, tomando en cuenta las particularidades de las personas en contexto de movilidad humana que se involucran en

⁴ [CIDH. Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, parágrafo 141.](#)

procesos de transporte de drogas. Al efecto, promover la creación de un foro anual;

- II. Asegurar el acceso a la defensa pública gratuita en condiciones de igualdad, como garante del respeto a las debidas garantías en todo procedimiento del cual sea parte la persona en contexto de movilidad humana y en todas sus respectivas etapas, particularmente, el acceso a servicios de intérpretes idóneos, asistencia consular y acceso a la información. En las estrategias de defensa de personas en contexto de movilidad humana imputadas por tráfico de drogas sin arraigo social y familiar, deberán considerarse planteos alternativos a la privación de libertad. Así mismo, evaluar la pertinencia de la imposición de cualquier sanción en los casos de personas en contexto de movilidad humana imputadas por delitos de drogas y que además sean víctimas de trata, solicitantes de protección internacional, o se encuentren amparados por el principio de la no devolución.
- III. Promover la atención especializada a las mujeres en contexto de movilidad humana y en situación de prisión, especialmente aquellas con hijos pequeños y dependientes o embarazadas, implementando, en la medida de lo posible, las medidas específicas previstas en las Reglas de Bangkok;
- IV. Difundir e implementar programas para fortalecer los lazos entre los presos inmigrantes y extranjeros y sus familias, a fin de minimizar los efectos nocivos de la prisión, como es el caso del Proyecto Visita Virtual Internacional;
- V. Impulsar una estrategia regional para la ratificación de la “Guía Regional de Defensa Pública y Protección Integral de las Personas Privadas de Libertad”, que permita la creación de instrumentos técnicos comunes (protocolos) que conduzcan al desarrollo de estándares de gestión para las personas privadas de libertad, particularmente en inmigración y detenido por posesión de drogas; y
- VI. Promover debates y difusión de contenidos científicos en el marco de la REDPO, de manera que esta Reunión Especializada sea el órgano de difusión del pensamiento sobre la situación de las personas en contexto de movilidad humana detenidas por posesión de drogas en nuestra Región.

**"Proposta de Declaração sobre Imigração, Pobreza e Direitos das Pessoas
Envolvidas no Tráfico de Drogas"**

Reunião Especializada de Defensores Públicos Oficiais do MERCOSUL (REDPO)

Considerando:

O Plano de Ação Hemisférico sobre Drogas 2021 a 2025, apresentado no 68º Período Ordinário de Sessões, entre 9 e 11 de dezembro de 2020, na cidade de Bogotá, pela Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas da Organização dos Estados Americanos (OEA / CICAD)⁵;

O Relatório Mundial sobre Drogas, publicado em 2020, pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), incluindo o impacto da pandemia COVID-19 no mercado de narcóticos⁶;

O Relatório sobre Pobreza e Direitos Humanos nas Américas, aprovado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 7 de setembro de 2017⁷;

As “100 Regras de Brasília”, aprovadas na XIV Cúpula Judicial Ibero-americana de 2008, sobre o acesso à justiça para pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo aquelas em situação de pobreza, migração ou outras formas de deslocamento forçado e também pessoas privadas de liberdade;

As Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Prisioneiros, chamadas “Regras de Mandela”, aprovadas pela Assembleia Geral da ONU em 17 de dezembro de 2015;

As Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Privadas de Liberdade e Medidas Não-Custódias para Mulheres infratoras, conhecidas como “Regras de Bangkok”;

⁵ http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?IE=CO005F

⁶ <https://wdr.unodc.org/wdr2020/index.html>

⁷ <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PobrezaDDHH2017.pdf>

Que, em grande parte, existe um percentual de pessoas em um contexto de mobilidade humana em nossos países, geralmente pobres, que se encontram presas por tráfico e porte de drogas, em situação de vulnerabilidade;

Que as mulheres, em particular as latino-americanas, são atravessadas por várias condições de vulnerabilidade, seja pela sua situação de pobreza, desigualdade de oportunidades, falta de autonomia financeira e social, violência de gênero, migração, entre outros fatores, que mantêm íntima relação com o crescimento do número de mulheres privadas de liberdade e / ou processadas em relação ao tráfico de drogas;

Que os direitos e garantias das pessoas privadas de liberdade são fundamentais para mitigar os malefícios do encarceramento e do retorno à vida social, para as quais requerem proteção especial, especialmente considerando as maiores dificuldades que podem surgir no caso das pessoas encarceradas. mobilidade;

Que é imprescindível resolver os fatores de desigualdade que afetam particularmente as pessoas no contexto da mobilidade humana nos processos em que se inserem, que seja garantido o acesso à defesa pública gratuita, com a intermediação de intérpretes idôneos, e adequada informação sobre consular assistência e seu pedido. Da mesma forma, as leis que regulamentam os crimes relacionados ao tráfico de drogas devem estar de acordo com o princípio da legalidade;

Que o direito à visita (Regra 58 das Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos) é um direito primário para a manutenção e fortalecimento dos laços familiares, sendo imprescindível a implementação de medidas que o assegurem - por exemplo, o projeto Visita Virtual Internacional.

Que, tendo em conta a natureza transfronteiriça do problema e as consequências particulares que se geram nos projetos de vida das pessoas no contexto da mobilidade humana, devem ser reforçados os mecanismos de colaboração entre os defensores públicos de forma a garantir o acesso aos direitos e aos cidadãos. serviços, bem como garantir procedimentos de retorno seguro voluntário;

Que o princípio geral de não criminalização da migração deve ser respeitado, com destaque para o Parecer Consultivo nº. 18/03 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, segundo a qual é obrigação dos Estados “determinar suas políticas migratórias somente à luz dos instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos” e “princípios de igualdade e não discriminação”.

Que, levando em consideração as diversas realidades das pessoas no contexto da mobilidade humana, o fato de haver um processo penal contra elas não deve ser um obstáculo ao acesso a medidas alternativas de proteção e à análise independente e imparcial de possíveis pedidos de refugiados, proteção medidas como vítima de tráfico, entre outras;

Que a recomendação no. 203 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, ponto 06, reconhece a possibilidade de configurar o trabalho forçado como participação forçada ou envolvimento obrigatório em atividades ilegais, inclusive no âmbito do tráfico de pessoas (item 4.g), recomendando aos trabalhadores que os Estados Membros adotem o as medidas necessárias para garantir que as autoridades competentes tenham a prerrogativa de não processar ou impor sanções às vítimas dessas condições;

Que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no relatório “Direitos humanos dos migrantes e outras pessoas no contexto da mobilidade humana no México”⁸ Em 2013, reconheceu como situações de tráfico de pessoas situações em que o migrante é forçado a trabalhar de diferentes formas para grupos criminosos organizados, incluindo atividades criminosas;

As Defensorias Públicas, organizadas e em conformidade com o Estatuto da REDPO, no âmbito de nossas faculdades constitucionais e legais, DECLARAMOS que é necessário:

- I. Divulgar e compartilhar boas práticas em políticas de defesa e estratégias jurídicas relacionadas aos crimes de drogas no contexto da realidade de nossa Região, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento normativo na legislação de cada país e práticas na administração da justiça que evitem a criminalização de pobreza, tendo em conta as particularidades das pessoas em

⁸ [CIDH. Direitos humanos dos migrantes e outras pessoas no contexto da mobilidade humana no México, parágrafo 141.](#)

- contexto de mobilidade humana que estão envolvidas nos processos de transporte de drogas. Para tanto, promover a criação de um fórum anual;
- II. Assegurar o acesso à defesa pública gratuita em condições de igualdade, como fiador do respeito das devidas garantias em todos os procedimentos de que a pessoa se inscreva no âmbito da mobilidade humana e em todas as suas respectivas etapas, nomeadamente, o acesso a serviços de intérprete adequados, assistência consular e acesso à informação. Em estratégias de defesa para pessoas no contexto de mobilidade humana acusadas de tráfico de drogas, abordagens alternativas para a privação de liberdade devem ser consideradas. Da mesma forma, avaliar a relevância da imposição de qualquer sanção nos casos de pessoas em contexto de mobilidade humana acusadas de crimes de drogas, especialmente aquelas vítimas de tráfico, requerentes de proteção internacional ou protegidas pelo princípio de não retorno.
 - III. Promover a atenção especializada às mulheres em situação de mobilidade humana e em situação de prisão, especialmente aquelas com filhos jovens e dependentes ou mulheres grávidas, implementando, na medida do possível, as medidas específicas previstas nas Regras de Bangkok;
 - IV. Divulgar e implementar programas de estreitamento dos laços entre imigrantes e presos estrangeiros e suas famílias, de forma a minimizar os malefícios da prisão, como é o caso do Projeto Visita Virtual Internacional;
 - V. Promover uma estratégia regional de ratificação do “Guia Regional para a Defesa Pública e Proteção Integral das Pessoas Privadas de Liberdade”, que permita a criação de instrumentos técnicos comuns (protocolos) que conduzam ao desenvolvimento de normas de gestão para as pessoas privadas de liberdade. liberdade, particularmente na imigração e detenção por posse de drogas; e
 - VI. Promover debates e divulgação de conteúdos científicos no âmbito de REDPO, para que esta Reunião Especializada seja o órgão de difusão do pensamento sobre a situação das pessoas no contexto da mobilidade humana detidas por porte de drogas em nossa Região.